

Territorios y recursos naturales: el saqueo versus el buen vivir

Broederlijk Delen 



Quito, abril 2008

**Territorios y recursos naturales:
el saqueo versus el buen vivir**

Producción: *Broederlijk Delen*

Edición: *Agencia Latinoamericana de Información - ALAI*

Revisión de textos: *Sally Burch, Eduardo Tamayo G., Juan Pablo Corral*

Corrección: *Paola de la Vega*

Ilustración de portada: *Jano*

Diseño de portada: *Verónica León*

Diseño y diagramación: *Serafín Ilvay*

Impresión: *Gráficas Silva*

ISBN: 978-9942-01-660-7

Quito, abril 2008

Broederlijk Delen

Huidevettersstraat 165

1000 Brussels, Bélgica

T. (32) (0)2/502.57.00 F. (32) (0)2/502.81.01

info@broederlijkdelen.be

<http://www.broederlijkdelen.be/>

Agencia Latinoamericana de Información - ALAI

Casilla 17-12-877

Quito, Ecuador

T. (593 2) 250 2074 F. 250 5073

info@alainet.org

<http://alainet.org>

Los artículos y las opiniones vertidas en este libro son de estricta responsabilidad de sus autores/as y no reflejan necesariamente el pensamiento de las entidades editoras. Pueden ser reproducidos, a condición de que se mencione debidamente la fuente.

Indice

<i>Introducción. Las venas (re)abiertas de América Latina</i>	5
<i>Prefacio, Joan Martínez Alier</i>	11
I. Visiones e intereses en disputa	
Los recursos naturales como mercancía, <i>Marco Arana Zegarra</i>	19
De deudores a acreedores, <i>Aurora Donoso Game</i>	32
La madre naturaleza desde la cosmovisión Maya, <i>Rodolfo Pocop Coroxon</i>	39
II. Tendencias político-económicas en el control y manejo de los recursos naturales	
Los alcances de la deuda ecológica, <i>Hildebrando Vélez</i>	49
Plan Colombia, plan de muerte, <i>Diana Murcia</i>	57
Guatemala: Libre comercio y TLC versus integración de los pueblos, <i>Natalia Atz Sunuc</i>	66
Ecuador. Desplazamiento y muerte: la otra cara de la represa Baba, <i>Germán Jácome López</i>	72
III. Estrategias de defensa de los recursos naturales	
La justicia ambiental en la estrategia del ecologismo popular, <i>Lucio Cuenca</i>	79
Las luchas del ecologismo popular en Ecuador, <i>Alexandra Almeida</i>	85
Colombia: Las nuevas soberanías, <i>Hildebrando Vélez</i>	92
La minería en Honduras: un atentado contra la salud pública, <i>Juan Almeyda</i>	98

Dos casos de resistencia a la contaminación tóxica en el Ecuador, <i>Esperanza Martínez</i>	106
Ecuador: La lucha de Sarayaku contra las petroleras, <i>Betsy Santi Gualinga</i>	112
Desde lo local a lo mundial en defensa de los bosques, <i>Ricardo Carrere</i>	115
Bolivia: Defensa del territorio frente a la Repsol, <i>Rubén Cuba</i>	122
Bolivia: Control comunitario de los recursos naturales, <i>Fernando Garcés</i>	130
Redes del Norte: Aliadas estratégicas, <i>Geneviève Tournon</i>	134
El caso del Congo: “celular sin sangre”, <i>Thomas Craenen</i>	137
Transparencia y rendición de cuentas, <i>Laura Furones Fragoso</i>	141
Responsabilidad social empresarial: Maquillando el saqueo, <i>César Padilla</i>	146

IV. Alternativas para un manejo sostenible

La soberanía en tiempos de globalización <i>Gustavo Marcelo Rodríguez Cáceres</i>	155
Uso alternativo de las fuentes energéticas en Cuba <i>Ángel Luis Brito Sauvanell</i>	166
Colombia: Los recursos naturales desde la espiritualidad e interculturalidad <i>Aparicio Ríos</i>	170
Bolivia. Defensa colectiva de los derechos socio-ambientales, <i>Elizabeth López</i>	181
Un camino alternativo: El Tratado Comercial de los Pueblos, <i>Miguel Lora</i>	184
Hacia una sociedad post-petrolera, <i>Elizabeth Bravo</i>	196
Petróleo, rentismo y subdesarrollo: ¿una maldición sin solución? <i>Jürgen Schuldt, Alberto Acosta</i>	204

III. Estrategias de defensa de los recursos naturales

Transparencia y rendición de cuentas

Laura Furones Fragoso
Global Witness - Reino Unido

Global Witness es una Organización No Gubernamental (ONG) –establecida en el Reino Unido– que desde hace más de una década investiga los vínculos existentes entre la explotación de los recursos naturales y los conflictos y la corrupción generados por esta actividad. Nuestro trabajo incluye la denuncia y campaña contra los diamantes de sangre, que han financiado cruentos conflictos en países como Sierra Leona, Angola, República Democrática del Congo y Liberia; la lucha contra la tala ilegal y la corrupción relacionada con la misma, en Camboya, Birmania, Honduras y Nicaragua; y la explotación petrolera y gasífera en África (Golfo de Guinea) y la región del Caspio. Nuestras investigaciones documentan cómo la extracción de los recursos naturales, sin la rendición de cuentas y la transparencia apropiadas, desemboca en pobreza, violación de derechos humanos, conflictos e inestabilidad política y económica.

La falta de transparencia y de mecanismos efectivos de rendición de cuentas se erigen como dos de las mayores dificultades a las que se enfrentan los países que –aunque paradójicamente ricos en recursos naturales– sufren elevados niveles de pobreza, corrupción, inequidad y violaciones en los derechos humanos fundamentales, es decir la llamada “maldición de los recursos naturales”.

En esta breve presentación quiero dar algunas pinceladas sobre varias iniciativas que, impulsadas desde el Norte, pretenden apoyar y establecer sinergias con organizaciones del Sur, para juntos conseguir el objetivo común de un desarrollo sostenible de los países y la erradicación de los problemas antes señalados. Las iniciativas que mencionaré –aunque todas bastante jóvenes– están dando resultados en impactos prometedores y estableciendo importantes precedentes para un manejo responsable que permita el desarrollo equitativo de los países del Sur.

Hagan público lo que pagan (PWYP)

La campaña *Hagan público lo que pagan* (PWYP, por sus siglas en inglés) se constituyó en el año 2002 como una iniciativa impulsada por Global Witness, Transparencia Internacional, Save the Children UK, CAFOD y el Open Society Institute. Actualmente, esta coalición internacional cuenta con trescientas ONGs en más de cincuenta países de todo el mundo.

PWYP nació con el propósito de apoyar a los ciudadanos de países en desarrollo –ricos en recursos naturales– para que obliguen a sus gobiernos a ser más transparentes en la gestión de los ingresos generados por las compañías petroleras y mineras. Se trata de obligar a dichas compañías a publicar lo que pagan a los gobiernos de los países de donde se extraen los recursos para, de esta manera, incrementar la transparencia de sus ingresos y obligar a una mejor distribución de las riquezas, como condición esencial para aliviar la pobreza, promover el desarrollo justo y equitativo, mejorar la responsabilidad social y corporativa, y reducir la corrupción. Además, se trabaja para exigir a los gobiernos mayor transparencia en el gasto público, y de esta forma saber en qué se invierten las rentas generadas de las actividades extractivas.

Los logros de esta campaña incluyen una movilización sin precedentes de grupos de la sociedad civil en regiones como África,

Asia Central, Europa Occidental, América del Norte, entre otras. Igualmente, se ha logrado que varias compañías publiquen los pagos hechos a los gobiernos, así como también una declaración del G8 sobre la lucha contra la corrupción y la mejora de la transparencia. Por otro lado, en las cartas del Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha logrado incluir una guía para la transparencia de ingresos de la explotación de recursos; en el Banco Mundial y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD, por sus siglas en inglés), un principio de transparencia, como requisito para la financiación de proyectos; y en la Unión Europea (UE), una Directiva de las Obligaciones de Transparencia. Por último –aunque igualmente esencial– se ha asistido al lanzamiento de la ITIE (Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas).

La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE)

La ITIE es una iniciativa a nivel de gobiernos, que incluye múltiples actores: empresas (que pagan impuestos), gobiernos (que reciben ingresos), sociedad civil (que usa la información), gobiernos donantes, organismos bi/multilaterales (FMI, BM) e inversores.

Esta iniciativa internacional, lanzada por el Primer Ministro Británico en 2002, y cuya

Secretaría Internacional funciona actualmente en Oslo, nació como respuesta al llamado de la coalición PWYP.

La adhesión al programa es voluntaria, tanto por parte de gobiernos productores como de compradores. El objetivo último es contar con un mecanismo para que los gobiernos rindan cuentas a sus ciudadanos de cómo están gastando el dinero que reciben de la explotación de los recursos naturales, que pertenecen a todos. Hay que reconocer que el proceso es complicado en la medida en que se tiene que trabajar mucho para lograr la credibilidad y la transparencia necesarias.

Para los países en desarrollo, participar en la ITIE significa demostrar a sus ciudadanos los esfuerzos gubernamentales por combatir la corrupción, atraer a los inversionistas extranjeros, abrir el acceso al capital internacional, garantizar la seguridad energética, y sumarse a los Objetivos del Milenio.

Esto, desde luego, con la condición de que exista una decisión soberana de cada país para una extracción sostenible de los recursos, y, además, una decisión de que los beneficios de dicha extracción se orienten a satisfacer las necesidades reales de la población, aboliendo aquellos procesos en los que el dinero se desvanece en el aire.

A pesar de que ITIE es una iniciativa relativamente nueva, ya existen logros importantes. Por ejemplo, Azerbayán y Nigeria publican actualmente datos de ingresos petrolíferos. Además, existe un creciente número de países comprometidos con la implementación del programa a nivel mundial. En Latinoamérica, cabe destacar el caso de Perú, que fue oficialmente admitido como país candidato en septiembre de 2007.

Criterios de la ITIE

- Publicación regular de los pagos de compañías e ingresos de gobiernos, accesibles y detallados.
- Auditoría transparente e independiente de los datos.
- Recopilación de datos por un administrador independiente.
- Todas las compañías, incluidas las estatales, deben atenerse a estos criterios.
- Sociedad civil activamente involucrada en el diseño, monitoreo y evaluación del proceso, para contribuir al debate público.
- Plan de trabajo público y económicamente viable, y marco temporal –una vez identificadas las limitaciones en capacidades y abordadas por donantes e instituciones financieras internacionales.

Otro de los logros ha sido el lanzamiento –por parte del gobierno de Noruega– de la iniciativa “Petróleo para el desarrollo”, que se propone ayudar a los países productores de petróleo, para que la explotación del crudo beneficie realmente a los actores locales, y promueva su desarrollo sostenible y equitativo.

Monitoreo Forestal Independiente en Honduras (MFI)

El MFI es el trabajo de una organización independiente que, con el beneplácito de la autoridad forestal, observa y apoya los sistemas oficiales de aplicación de la legislación forestal. Tiene por objetivo constituirse en una herramienta para mejorar la gobernanza en el sector forestal, con la adecuada aplicación de la ley, dentro de un marco legal adecuado, y con la participación pública y transparente en la rendición de cuentas.

Además, se propone garantizar un reparto más equitativo de los beneficios y realizar un monitoreo detallado de cómo y dónde se está llevando a cabo la extracción forestal ilegal e insostenible, o dónde existen prácticas corruptas por parte de la misma autoridad forestal.

Global Witness ha implementado el MFI en diversos países del mundo, pero quisiera destacar el caso de Honduras, que me parece interesante por varios motivos. Primero, porque constituyó el primer proyecto de

esta naturaleza en Centroamérica, iniciándose en mayo de 2005. Su implementación la llevaron a cabo, de forma conjunta, Global Witness y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH), trabajando activamente con la autoridad forestal del país –la Administración Forestal del Estado, Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (AFE-COHDEFOR)– con la que se firmó un convenio de colaboración en el que se detallan los protocolos de trabajo. Dicha labor se centró inicialmente en misiones de campo al Departamento de Olancho –aquel de mayor producción forestal del país– para verificar los sitios de aprovechamiento forestal y documentar las irregularidades encontradas.

Es importante destacar que aunque, en un inicio, la iniciativa fue promovida por nuestra ONG, ahora es CONADEH quien lidera el proyecto, lo cual nos resulta grato, pues nuestro primer objetivo fue capacitar a algunas instituciones del país para que continuaran con la tarea e institucionalizaran la función de MFI, cuestión que progresivamente se ha dado en Honduras.

De otro lado, hasta ahora se han elaborado cerca de cincuenta informes individuales, más dos informes recopilatorios. En ellos se documentan, entre otros, casos de actividades ilegales, tales como: corte fuera del área designada, corte de mayor volumen al autorizado, corte dentro de zonas protegi-

das, incumplimiento de normas técnicas, y el uso fraudulento de guías de transporte.

Toda esta información es usada por la sociedad civil y las ONGs internacionales para acciones de incidencia. Esta iniciativa ha logrado cambiar la percepción pasiva de los diferentes actores. Por ejemplo, la autoridad forestal está más comprometida con la implementación de acciones concretas: denuncias, multas, cambio de personal, etc.

Lecciones aprendidas

Finalmente, quisiera mencionar algunas lecciones aprendidas en el proceso. Por ejemplo, la necesidad de establecer contactos y una interacción con las ONGs del Sur, con las cuales se podría establecer relaciones de muchas clases, en función de las posibilidades y conveniencias –dichas relaciones no siempre tienen por qué ser formales o públicas–.

Se han logrado crear sinergias provechosas, sobre todo en lo que se refiere al apoyo Norte/Sur en el campo de la incidencia internacional, o en el acceso a esferas elevadas de gobierno, organismos bi/multilaterales, apertura a espacios de diálogo e inclusión de la sociedad civil. A su vez ha permitido romper el mito de que las comunidades locales no pueden hablar abiertamente, considerando sobre todo que las organizaciones locales son las que tienen conocimiento de su realidad, y son ellas las que deben exigir a los gobiernos una rendición de cuentas. Además, las organizaciones locales son las que tienen una mayor presencia en el país, lo cual es fundamental para dar seguimiento y sostenibilidad a todas estas iniciativas.

Laura Furones Fragoso trabaja desde hace más de un lustro en temas de gobernanza, transparencia y rendición de cuentas en el sector forestal. Actualmente es manager regional para América Latina de proyectos de Monitoreo Forestal Independiente (MFI) en Global Witness.